

Los retos urgentes de la Sanidad Pública española

José Martínez Olmos
 Profesor de la Escuela
 Andaluza de Salud Pública.
 Exsecretario General
 de Sanidad

Aunque la Sanidad Pública española está respondiendo con bastante solvencia asistencial al impacto de la pandemia de la COVID-19 (conviene valorar la gran capacidad asistencial de nuestro sistema y de sus profesionales) y, aunque somos pioneros en la aplicación del programa de vacunas frente al SARS-Cov, el hecho de tener que seguir afrontando nuevas olas epidémicas va a condicionar nuestra capacidad de superar los desafíos que la Sanidad Pública tiene pendientes desde hace algún tiempo, alguno de los cuales se han agravado por el efecto de la pandemia.

Se puede afirmar que la Sanidad Pública sufre hoy signos de deterioro en el acceso, en la calidad y en la equidad, los cuales nos deben llevar a la preocupación. Es un deterioro consecuencia, sobre todo, de los recortes de 2012 y por el importante daño causado en nuestros servicios por la aún vigente pandemia COVID-19.

Cuando por efecto de la vacuna se ha ido mitigando el impacto de la pandemia y la demanda por COVID-19 disminuía las insuficiencias del sistema (primaria en especial) y el poco respaldo que en muchas comunidades se ofrece a la Sanidad Pública están haciendo que amplios sectores de la sociedad ya estén buscando en la sanidad privada soluciones a sus demandas, que perciben insatisfechas en la Sanidad Pública. Estamos en riesgo de que cristalice en España una sanidad dual si no se produce una reacción que lleve a la formulación de una nueva estrategia para reforzar y reformar el Sistema Nacional de Salud.

No vale seguir diciendo que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo porque ello puede

conllevar una mirada miope frente a los serios problemas y desafíos actuales. Ello no significa desconocer o negar que tenemos un buen sistema sanitario, una gran calidad asistencial general, buenas infraestructuras sanitarias y profesionales con magnífica capacitación. Pero, hoy, la Sanidad Pública española muestra signos claros de inequidad entre territorios y se corre el riesgo de que, para determinados servicios y necesidades percibidas, deje de ser la mejor opción para cualquier ciudadano, en especial en determinadas comunidades cuyos gobiernos no priorizan la Sanidad Pública. Ante el deterioro actual, puede decirse que evitar que consolide un sistema dual es el asunto central que debe orientar la acción y la agenda política prioritaria en el ámbito de la salud.

Una acción estratégica basada en las propuestas emanadas de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España que el Congreso de los Diputados formuló en el verano de 2020, es imprescindible. Desde el punto de vista de la socialdemocracia, el objetivo indiscutible a plantear es asegurar que la sociedad española pueda disponer de una Sanidad Pública de excelencia, con acceso universal y con garantía de equidad para todos; una Sanidad



Pública eficiente que ofrezca condiciones que ninguna otra oferta pueda mejorar tanto en la incorporación de los avances médicos y la innovación en la oferta asistencial, como en la garantía de inmejorables tiempos de respuesta en el acceso. Y si aspiramos a esto, serán necesarios algunos cambios para reforzar institucionalmente la capacidad de asegurar los principios señalados, más recursos y una gestión eficiente que haga rentable socialmente esta inversión.

La pandemia ha venido a deteriorar más los tiempos de espera y de respuesta que se ofrecen tanto para el acceso a la atención primaria, como el acceso a pruebas diagnósticas, consultas de seguimiento o intervenciones quirúrgicas programables. Y estas listas de espera son, además, desiguales según el territorio sin que se haga frente a esto para asegurar tiempos seguros y equidad. Ahora, con urgencia, conviene afrontar las listas y los tiempos de espera en consultas, en diagnóstico y en el ámbito quirúrgico.

Pero, además, el sistema público tiene que orientar sus acciones hacia la lucha frente a los determinantes sociales en salud, con políticas de salud pública solventes que incorporen desde el Ministerio de Sanidad fondos de cohesión finalistas para la corrección de desigualdades territoriales en todas las áreas donde estas se detecten, con estrategias y planes evaluables en sus resultados. Una nueva Agencia de Salud Pública, ya en proceso de aprobación, es imprescindible. Y en aras de la equidad y la calidad, la Sanidad Pública tiene que poder ofrecer a cualquier paciente, viva donde viva, los mejores centros de referencia acreditados para procesos complejos específicos; centros de referencia públicos o concertados cuya financiación finalista corresponda al Ministerio de Sanidad para hacer tangibles a sus competencias constitucionales.

Son también retos urgentes una adecuada incorporación de los avances en materia de inteligencia artificial y digitalización por su potencial capacidad de mejora de la calidad asistencial y de la accesibilidad de la población. Estas tecnologías están abriendo un escenario de transformación disruptiva de la capacidad asistencial de los servicios de salud y, de como seamos capaces de incorporar los avances en la cartera de servicios, depende mucho evitar que se abran nuevas brechas de desigualdad.

La sanidad que necesitamos requiere un mejor sistema de gestión y motivación profesional, así como de una adecuada planificación de necesidades de nuevos profesionales y de nuevas profesiones para cubrir las demandas actuales y futuras. El trabajo conjunto desde Sanidad con Educación y Universidades se hace imprescindible.

La importancia de la salud para la sociedad y la importancia de disponer de un potente sistema público de salud se ha revalidado claramente en este periodo de pandemia COVID-19. En el caso de nuestro sistema descentralizado, siendo esta característica una fortaleza que ha permitido el desarrollo de una sanidad solvente en las últimas dos décadas, la gobernanza del sistema debe ser reforzada

ya que la experiencia en la pandemia ha ofrecido luces y sombras de las que hay que extraer las correspondientes enseñanzas. Estoy convencido que para un mejor engranaje del sistema sanitario en el modelo descentralizado de nuestro Estado autonómico conviene apostar por incorporar el derecho a la salud como un derecho fundamental en una futura reforma de la Constitución que incluso, si incorpora cambios en el rol del Senado para mejorar nuestro modelo de Estado, ofrecerá nuevos instrumentos para una mejor cogobernanza.

La Sanidad Pública sufre hoy signos de deterioro en el acceso, en la calidad y en equidad, que nos deben llevar a la preocupación. Estamos ante un deterioro consecuencia, sobre todo, de los recortes de 2012 y del importante daño causado en nuestros servicios por la aún vigente pandemia COVID-19.

También hay que tener en cuenta que el adecuado ejercicio de competencias que la Constitución establece para las administraciones central y autonómicas requiere muchos más recursos económicos para todos. Creo que en el nuevo modelo de financiación autonómica algunos recursos deberían tener un cierto carácter finalista para la sanidad y que, en el caso del Ministerio de Sanidad, debieran ser mucho más cuantiosos para financiar y cofinanciar las políticas de cohesión, calidad y equidad que necesitamos aplicar con urgencia. El anteproyecto de Ley de Equidad Universalidad y Cohesión que ha comenzado recientemente su tramitación, ofrece una buena oportunidad que debemos aprovechar.

Finalmente, asegurar una rápida y eficiente incorporación de la innovación es de importancia vital y en este sentido, hay amplio margen de mejora. La ciencia es una clave para el avance y conviene señalar que la colaboración entre la Sanidad Pública y el sector privado para la generación de innovación es una vía con un enorme potencial. En el ámbito farmacéutico se pueden obtener muchos más beneficios colaborando más el sector público y privado en el impulso de ensayos clínicos y en la generación de patentes conjuntas. Igualmente, en el ámbito de las tecnologías sanitarias, cabe un mayor espacio de colaboración que beneficiará al sistema y a los pacientes. Estas y otras líneas no señaladas por economía de espacio, deben guiar las acciones políticas para una Sanidad Pública como la que necesitamos. **TEMAS**